

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 22º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-1325-2010
CARATULADO : GUZMAN / FISCO DE CHILE

Santiago, veintiocho de Febrero de dos mil veinte

VISTO:

1º.- A fojas 2, comparece don Alejandro Guzmán Barbe, abogado, con domicilio en calle Bandera N°465, oficina 702, en representación de MARTA ANGÉLICA CONCHA CONTRERAS e interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado legalmente por don Carlos Mackenney Urzúa, ambos con domicilio en calle agustinas 1687, Santiago, solicitando se condene al demandado a pagar a la demandante la suma de \$1.200.000.000 o a la suma que el Tribunal determine, con costas.

2º.- A folio 1 del expediente electrónico causa *C-33059-2018*, caratulada “*Concha/ Fisco de Chile*” seguida ante el 23º Juzgado Civil de Santiago, comparece Adil Brkovic Almonte, abogado, en representación de MARTA ANGÉLICA CONCHA CONTRERAS; SERGIO ERNESTO LAGOS CONCHA, comunicador social; ESTEBAN HUMBERTO LAGOS CONCHA, abogado, todos con domicilio para estos efectos en calle San Pio X N°2460, oficina 702, comuna de Providencia, Región Metropolitana, quienes vienen en interponer demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra del **FISCO DE CHILE**, persona jurídica de Derecho Público, representado por doña María Eugenia Manaud Tapia, abogado, ambos domiciliados en Santiago, Agustinas 1687, edificio Plazuela de Las Agustinas, solicitando declare:

I.- Que se condene a la demandada al pago de las siguientes sumas de dinero, a título de indemnización de perjuicios por daño moral.

a) La suma de \$ 1.200.000.000.- (mil doscientos millones de pesos), a favor de la demandante Marta Angélica Concha Contreras.

b) La suma de \$200.000.000.- (doscientos millones de pesos), o la cantidad que el tribunal determine, con reajustes e intereses, a contar de la fecha de la sentencia que la conceda y hasta el pago efectivo de la



indemnización, a favor de los demandantes Marta Angélica Concha Contreras, Sergio Ernesto Lagos Concha y Esteban Humberto Lagos Concha.

II.- Se condene al demandado al pago de las costas.

3º.- A fojas 269, y por resolución de fecha 24 de septiembre de 2019, se produjo la acumulación de la causa **C-33059-2018**, caratulada “**Concha/ Fisco de Chile**” seguida ante el 23º Juzgado Civil de Santiago, a los presentes autos, por cumplirse los presupuestos exigidos por la ley.

4º.- Ambas demandas se fundan en los hechos acaecidos en 1975 respecto de Sergio Humberto Lagos Marin, padre y cónyuge, respectivamente, de los demandantes. Los actores señalan en sus libelos que el 7 de febrero de 1975, agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (en adelante, indistintamente “DINA”) secuestraron a Sergio Lagos Marin en circunstancias que circulaba por la calle San Pablo entre Ricardo Cumming y Maturana. Detallan que momentos antes Sergio Lagos había estado en una fuente de soda del sector en compañía de su hermano Nelson Lagos Marín, de unos catorce años de edad en ese momento, y que al momento de salir de aquel lugar fue detenido por agentes de la DINA, quienes se movilizaban en dos vehículos particulares más un furgón de carabineros.

Pormenorizan que el Sr. Lagos fue introducido a uno de los vehículos particulares en los que los agentes de la DINA circulaban, oportunidad después de la cual nunca más volvieron a saber de él ni lo volvieron a ver. Agregan que a pesar del recurso de protección que interpusieron en su favor y de muchas otras gestiones y diligencias que llevaron a cabo para dar con su paradero y averiguar sobre lo ocurrido con posterioridad a esa noche en que fue secuestrado, estos esfuerzos no arrojaron resultados sobre su paradero.

Relatan, que solo después del transcurso de muchos años, con ocasión de la investigación realizada por el Ministro de Fiero, Sr. Alejandro Soliz, se estableció en causa Rol C-182-1998 que después de ser secuestrado el Sr. Lagos fue trasladado a Villa Grimaldi. Lo anterior se pudo establecer a partir de los testimonios entregados en aquel proceso por otras personas que también estuvieron detenidas en ese lugar, estableciéndose en la mencionada causa que don Sergio Humberto Lagos Marín, fue víctima de



secuestro calificado a contar del día 07 de febrero de 1975, otorgándole la condición de víctima de violación a su derecho a la vida, agregando que los hechos descritos no se encuentran controvertidos y han sido reconocidos por el Estado de Chile a través de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

En cuanto a la responsabilidad del Estado, los actores alegan que conforme a la Constitución Política de la República de 1980, cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por el Estado, puede reclamar ante los tribunales de justicia. Postulan, que el inciso segundo del artículo 38 de la Carta Fundamental, consagra una acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad de los organismos del Estado, cuando estos por su actividad hayan provocado daño a las personas, ya sean naturales o jurídicas y que el deber del Estado de indemnizar los perjuicios causados por sus agentes se deriva, además, de los artículos 1, 5, 6, 7, 19 y 38 de la Constitución Política de la República de 1980, 4 y 44 de la Ley N°18.575 y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, normativa de la cual se desprende que la responsabilidad del Estado es objetiva e imprescriptible, citando jurisprudencia pronunciada por la Excm. Corte Suprema de nuestro país en este sentido.

Posteriormente, los actores analizan la responsabilidad estatal invocada a la luz del Derecho Internacional, alegando al suscribir convenciones internacionales y al dar su aprobación a múltiples resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, el Estado de Chile ha ido adquiriendo, de forma progresiva, una serie de obligaciones que responden a la obligación general de “*respeto de los derechos esenciales del hombre*” por parte de los Estados, obligación que se desprende tanto del preámbulo de la Carta de la Organización de los Estados Americanos así como de los artículos 3.K, 16, 17, 32, 44, 45, 46 y 136, en concordancia con los preceptos de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.



En mérito de lo expuesto, los actores postulan que la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos es una cuestión objetiva, toda vez que el ilícito por violaciones a los derechos fundamentales se produce en el momento en que el Estado actúa en violación de una norma obligatoria, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del agente.

Agregan que los hechos mencionados tienen el carácter de crimen de lesa humanidad, razón por la cual la responsabilidad del Estado debe determinarse de conformidad con la normativa internacional a la que Chile se ha obligado. Específicamente, arguyen que el conjunto de normas y principios del derecho público e internacional de los derechos humanos ha permitido conjugar un sistema de responsabilidad autónomo que se conforma transversalmente desde los primeros acuerdos interestatales el que sería aplicable en estos autos en la especie.

Advierten, que así lo han entendido los Tribunales Superiores nacionales, citando y comentando al efecto la más reciente jurisprudencia emanada de la Excma. Corte Suprema, que otorga el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles que derivan de los crímenes de lesa humanidad atentatorios contra los derechos humanos.

Por último, en lo que dice relación al daño provocado y el monto de la indemnización reclamada, los actores alegan que los hechos ilícitos imputados han causado un daño moral a los demandantes que es imposible de soslayar. Así señalan que la demandante doña Marta Angélica Concha Contreras en su calidad de cónyuge, y los demás demandantes, don Sergio Ernesto Lagos Concha y don Esteban Humberto Lagos Concha, en sus calidades de hijos, se vieron privados de la presencia, afectos y sustento económico de Sergio Lagos Marín, desde el momento en que fue secuestrado en febrero de 1975, situación que se vio agravada atendido que se trataba de una familia extremadamente joven, conformada en aquella época por la víctima de 25 años, su cónyuge de 19 años, un hijo un año y fracción y un segundo hijo que se encontraba en gestación en el vientre de su madre, quien nació cinco meses después de la desaparición de su progenitor.

Detallan la interminable y dolorosa búsqueda que doña Marta Angélica Concha Contreras tuvo que afrontar de su esposo así como los



padecimientos asociados a ésta búsqueda, que se extienden hasta la actualidad, ya que el cuerpo de su marido nunca fue encontrado. Dicen que a lo anterior, se sumó la crianza de un hijo de un año de edad y otro nacido posteriormente, sin respuestas que entregarles respecto de su padre. Sostienen que la desaparición de un familiar en los términos vividos por esta familia, representa una experiencia trágica e inédita que actúa sobre las diversas estructuras psíquicas de los individuos afectados provocándoles una constelación sintomática perturbadora e incapacitante, así como cambios profundos en su personalidad y en el curso de sus vidas. Finalizan sus alegaciones, indicando que el daño moral experimentado ha sido la consecuencia inmediata y directa del ilícito cometido por funcionarios del Estado, existiendo entre la acción criminal y el perjuicio experimentado una relación de causa a efecto; y, atendida la cercanía en la relación con la víctima, el daño no precisa de prueba sino que puede presumirse. Señalan que si bien el sufrimiento experimentado a causa del secuestro y asesinato de su familiar así como las secuelas directas e indirectas que lo anterior tuvo en sus vidas no es reparable con ninguna cantidad de dinero, si puede ser compensado motivo por el cual solicitan al Tribunal se condene al Fisco a las sumas indicadas precedentemente.

5º.- A foja 35 y siguientes, y a folio 9 del expediente electrónico, la parte demandada – FISCO DE CHILE-, representado por Irma Soto Rodríguez y por Carolina Vásquez Rojas, respectivamente, todos con domicilio en Agustinas N°1687, comuna de Santiago, **contesta las demandas** solicitando el rechazo total de éstas, en virtud de las excepciones y defensas que se exponen a continuación en forma conjunta respecto de ambas por contener los mismos argumentos.

En primer término, el demandado opone la excepción de improcedencia de la indemnizaciones alegadas por los demandantes, por haber sido ya reparada íntegramente en sus calidades de cónyuge e hijos de don Sergio Lagos Marín, en atención a las reparaciones otorgadas a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos. Al respecto, señalan que a partir de la dictación de la Ley N°19.123, se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, la que dentro de sus funciones debía promover “la reparación del daño moral de las víctimas”, lo que se



materializó a partir de dicha ley y demás normas, mediante las cuales se establecieron distintos mecanismos para concretar esta compensación, a saber, mediante a) reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; c) y reparaciones simbólicas.

Motivo de lo anterior, y luego de analizar las pretensiones y beneficios de estos programas de compensación, la demanda concluye que existe identidad entre lo pedido en el presente juicio y las reparaciones realizadas por el Estado, cuestión que hace improcedentes las pretensiones acá demandadas, por el principio básico que una misma causa no puede ser objeto de doble indemnización.

Consecutivamente, y en forma subsidiaria a la excepción de pago alegada, opone la excepción de prescripción extintiva de las acciones indemnización de perjuicios deducidos con arreglo a lo preceptuado por el artículo 2332 del Código Civil, en relación con el artículo 2497 del mismo cuerpo normativo.

Funda su excepción, en que conforme el relato de la demandante, la detención ilegal y desaparición de la víctima se produjo el 07 de febrero de 1975, en términos tales que, suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, o aun, hasta la entrega pública del informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, hechos acaecidos el 11 de marzo de 1990 y el 04 de marzo de 1991, respectivamente, a la fecha de notificaciones de las demandas de autos, esto es, el 14 de octubre de 2011 y el 07 de noviembre de 2018, respectivamente, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva de 4 años que establece el citado artículo 2332 del Código Civil.

Para el evento en que el Tribunal estimare que dicha norma no es aplicable en el caso de autos, viene en oponer la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil, fundada en que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización, y la



anotada fecha de notificación de las acciones civiles ejercidas en marras, éste transcurrió con creces.

Respecto a las alegaciones de las demandantes referidas a la imprescriptibilidad de la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados, indica que ninguno de los tratados internacionales invocados contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad. Agregan que tampoco ninguno de estos estatutos prohíbe ni impide la aplicación del derecho interno en esta materia, no siendo procedente una aplicación por analogía de la regla de imprescriptibilidad penal.

Agregan que a falta de una regulación especial que regule el término de prescripción de la acción invocada corresponde aplicar las normas de aplicación general consagradas en los artículos 2332 y 2947 del Código Civil, de acuerdo a las que el plazo de prescripción de estas acciones es de 4 años, por lo que, no cabe sino concluir, que las acciones deducidas se encuentran largamente prescritas.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, el Fisco argumenta que ninguna suma de dinero tendrá jamás el efecto de poner a los demandantes en la situación que existía antes de producirse el hecho ilícito alegado, por lo que la cuantía de cualquier indemnización que se otorgare por concepto de daño moral no debe ser determinada cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino que más bien buscando otorgando a quienes han sufrido el daño en cuestión una satisfacción, ayuda o auxilio que les permita atenuar o morigerar el daño sufrido haciéndolo más soportable y regulación que debe considerar los pagos ya recibidos por los demandantes a fin de evitar un doble pago por el mismo hecho.

6º.- A foja 180, y folio 10 del expediente electrónico rolan los **escritos de réplica**, reiterado íntegramente lo sostenido en las demandas, y agregando en lo pertinente que el Fisco de Chile no ha controvertido – atendido el mérito de su contestación- la condición de víctima de violación grave a los derechos humanos de don Sergio Humberto Lagos Marín, cometida por los agentes del Estado. Con respecto a la excepción de improcedencia de la indemnización del Fisco, señalan que se trata de



obligaciones diversas y distintas; ya que los beneficios de la citada ley son pagos periódicos y exigüos que en modo alguno pueden resarcir el sufrimiento moral que significó el secuestro de una persona y su posterior desaparición, no constando tampoco por el hecho de recibir estos beneficios una renuncia de los demandantes a eventuales futuras acciones para ser íntegramente indemnizados. Agregan que no existe norma legal que establezca la incompatibilidad entre los beneficios asistenciales o de sobrevivencia, y la indemnización que se solicita en autos.

Con respecto a la excepción de prescripción extintiva, solicita su rechazo, atendido que la materia de este juicio trata de delitos de lesa humanidad, de carácter imprescriptibles, citando jurisprudencia nacional e internacional al efecto, así como los tratados internacionales ratificados por Chile, ya señalados en sus demandas.

7º.- A foja 192, y folio 15, la demandada evacúa los **escritos de dúplica**, reiterando las excepciones y defensas opuestas en su escrito de contestación, en los que se solicita, en definitiva, el rechazo de las demandas.

8º.- A foja 206, se **recibe la causa a prueba**, rindiéndose la que consta en autos. Asimismo, a folio 25 se recibió la causa a prueba respecto de la demanda acumulada a estos autos, rindiéndose en aquella la que consta en el expediente electrónico.

9º.- A fojas 269, y por resolución de fecha 24 de septiembre de 2019, se produjo la acumulación de la causa ***C-33059-2018***, caratulada “***Concha/ Fisco de Chile***” seguida ante el 23º Juzgado Civil de Santiago, a los presentes autos, por cumplirse los presupuestos exigidos por la ley.

10º.- A foja 279, se **cita a las partes a oír sentencia**.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Doña Marta Angélica Concha Contreras, don Sergio Ernesto y don Esteban Humberto, ambos de apellidos Lagos Concha deducen demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, para que en virtud de los fundamentos de hecho y derecho sumariamente enunciados en la parte expositiva se condene al Fisco de Chile al pago de la suma total de \$1.600.000.000; \$1.200.000.000 para doña Marta Angélica Concha Contreras y \$200.000.000 para Sergio Lagos Concha y Esteban



Lagos Concha, respectivamente, por concepto de indemnización de los daños morales que se les habría infringido con ocasión de los hechos cometidos por agentes del Estado en contra de don Sergio Humberto Lagos Marín, cónyuge y padre de los demandantes, más reajustes e intereses, con costas.

SEGUNDO: Que, la demandada, contestando la acción dirigida en su contra, solicitó su total rechazo, con costas, interponiendo en su defensa las excepciones de pago y prescripción extintiva de la acción invocada, según lo previamente detallado en la parte expositiva de esta sentencia.

TERCERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, correspondía a la parte demandante los presupuestos de la acción de indemnización interpuesta, para lo cual rindió la siguiente prueba:

Documental:

1. Bajo Custodia N°262-2010, copia de Sentencia Definitiva de fecha 26 de abril de 2007, en causa Rol N°2.182-98, denominada “Sergio Lagos Marín”, dictada por Ministro de Fuero don Alejandro Solís Muñoz. Se deja constancia que mismo documento consta a Folio 1 del expediente electrónico.
2. A folio 1 del expediente electrónico, copia de Sentencia de Segunda Instancia, de fecha 21 de diciembre de 2007, en causa Rol N°3.587-2007, dictada por Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.
3. A folio 1 del expediente electrónico, copia de Sentencia de Segunda instancia, de fecha 27 de enero de 2009, pronunciada por la Segunda Sala de la Excma. Corte Suprema.
4. A foja 223, Certificado emitido por Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, con fecha 13 de junio de 2016, suscrito por José Miguel Guzmán Rojas, Director Ejecutivo, que da cuenta de los eventos que marcaron la experiencia de la familia Lagos Concha.
5. A folio 1 del expediente electrónico, certificado de matrimonio, celebrado con fecha 28 de julio de 1973 entre don Sergio Humberto Lagos Marín y doña Marta Angélica Concha Contreras; inscripción N°25, circunscripción Chillán, año 1973; extendido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, con fecha 09 octubre de 2018, código verificación 3b7d9c3b875d.



6. A folio 1 del expediente electrónico, certificado de nacimiento de don Sergio Ernesto Lagos Concha, nombre del padre Sergio Humberto Lagos Marín y nombre de madre Marta Angélica Concha Contreras, extendido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, con fecha 09 de octubre de 2018, código verificación 122250928f19.
7. A folio 1 del expediente electrónico, certificado de nacimiento de don Esteban Humberto Lagos Concha, nombre del padre Sergio Humberto Lagos Marín y nombre de madre Marta Angélica Concha Contreras, extendido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, con fecha 09 de octubre de 2018, código verificación 31a050d28f00
8. A folio 10 del expediente electrónico, copia de sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en “Caso Órdenes Guerra y Otros Vs. Chile”, con fecha 29 de noviembre de 2018. Se deja constancia que mismo documento consta a folio 14, del expediente electrónico.
9. A folio 29, Informe Psicológico, emitido por Psicólogo Alejandra Repetto Seeger, respecto de los demandantes de autos Marta Angélica Concha Contreras, Sergio Lagos Concha y Esteban Lagos Cocha. El cual concluye que: *“A partir de los resultados obtenidos a través de las entrevistas y observación clínica de los examinados, se puede establecer que existe un daño psicológico profundo, persistente y permanente en todos los entrevistados que reviste diferentes niveles de gravedad, que afectan de forma diferenciada en distintas áreas de la vida de cada uno, y que están relacionado con el dolor y el trauma producido por la desaparición de su esposo y padre, así como por el hecho de no haber conocido el paradero de sus restos, y por la falta de justicia y reparación respecto de esta muerte. La desaparición forzada de Sergio Humberto Lagos trastocó y determinó la vida de los examinados, generando sufrimiento y daño en todos los ámbitos de su existencia.”*
10. A folio 30, Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Volumen I, Tomo II, copias de páginas 792, 796 y 797.-
11. A folio 45, Informe de Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, respecto las Consecuencias de la desaparición



forzada sobre la salud en familiares de detenidos desaparecidos, emito por Nadia Saavedra, psiquiatra; Angélica Pizarro, psicóloga; y Flavia Taramasco, psicóloga.

Oficio:

12. A folio 46, consta oficio Ord. N°552, de Subsecretaría de Derechos Humanos de fecha 18 de junio de 2019, que certifica la calidad de víctima de violación a los derechos humanos a don Sergio Humberto Lagos Marín, quien de acuerdo al informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en el Tomo 2, volumen I, páginas 796 y 797 que se anexan, es detenido desaparecido desde el 07 de febrero de 1975.

Testimonial:

13. A folio 43, consta la declaración de la testigo Fresia Mónica Quilodrán Ramos.

14. A folio 43, consta declaración del testigo Lautaro Robín Videla Moya.

15. A folio 44, la deponente Alejandra Luz Repetto Seeger, psicología, juramentada y sin tachas, rinde declaración.

CUARTO: Que, a su turno, la parte demandada allegó la siguiente prueba al juicio:

Documental:

16. A fojas 71 y siguientes, copias simples de diversa jurisprudencia emitida por Excma. Corte Suprema.

17. A foja 233, constancia emitida por el Instituto de Previsión Social en junio de 2016, que informa beneficios concedidos a doña Marta Angélica Concha Contreras, por concepto de pensiones pagadas, bonificación compensatoria, aguinaldos, por un total de \$62.185.179.- pesos.

Oficios:

18. A fojas 201 y siguientes, oficio Ord. 2382/2012, en respuesta de Instituto de Previsión Social, que informa con fecha enero de 2012 que doña Marta Angélica Concha Contreras, se le ha otorgado pensión de reparación, recibiendo un total de \$42.044.900.- pesos.



19. A folio 51, Oficio Ord. 59683/2019, en respuesta del Departamento Secretaria General y Transparencia Instituto de Previsión Social, de 27 de junio de 2019, en el que se acompaña detalle de los beneficios recibidos por los demandantes e hijos de don Sergio Ernesto Lagos Marín, a saber: don Sergio Ernesto Lagos Concha, en calidad de hijo, pensión acumulada de \$2.588.042.- pesos, Ley N°19.980 la suma de \$7.411.958.- pesos, bonificación compensatoria \$252.000.- pesos, aguinaldo por \$93.144.- pesos, Total Pagado \$10.345.144.- pesos. Por su parte Estaban Lagos Concha, en calidad de hijo, pensión acumulada de \$3.668.917.- pesos, Ley N°19.980 la suma de \$6.331.083.- pesos, bonificación compensatoria \$252.000.- pesos, aguinaldo por \$128.031.- pesos, Total Pagado \$10.128.031.- pesos.

QUINTO: Que, existiendo causas acumuladas, en la cual, originalmente doña Marta Angélica Concha Contreras conforme demanda en expediente físico causa Rol C-1325-2010 tramitada ante este tribunal, demandó en calidad de cónyuge de don Sergio Lagos Marín, la suma de 1.200.000.000.- pesos por concepto de indemnización de perjuicios en contra de Fisco de Chile; y posteriormente, en causa C-33059-2018, tramitada ante el 23° Juzgado Civil de Santiago –acumulada al presente juicio- demandó conjuntamente con don Sergio Ernesto Lagos Concha y don Esteban Humberto Lagos Concha, en su calidad de cónyuge e hijos de don Sergio Lagos Marín, solicitando que se condene al Fisco de Chile a pagar la suma de \$200.000.000.- pesos, para cada uno de ellos, y no existiendo rectificación u aclaración por parte de doña Marta Concha Contreras de la suma demandada primitivamente en relación a la demandada interpuesta posteriormente en forma conjunta con sus hijos; dichas demandadas serán analizadas en forma conjunta teniendo como pretensión de la actora la suma de \$1.200.000.000.

SEXTO: Que a partir de la prueba rendida por los demandantes en este juicio se tiene por suficientemente acreditado que don Sergio Humberto Lagos Marín, militante del Movimiento Izquierda Revolucionario (MIR), fue detenido en la vía pública en Santiago por agentes del Estado el día 7 de febrero de 1975 y posteriormente trasladado al recinto Villa Grimaldi desde donde desapareció, sin existir antecedentes e información a la fecha



de su paradero. Lo anterior se tuvo por suficientemente acreditado con el mérito de la copia de la sentencia dictada en causa Rol 2182-98 dictada por el Ministro de Fuero don Alejandro Solís Muñoz, copia de la sentencia Rol 3587-2007 de la Iltna. Corte de Apelaciones de Santiago, del extracto del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que en la páginas 792, 796 y 797 del tomo 2 del Volumen I, reconoce al Sr. Lagos Marín como víctima de violación de sus derechos humanos.

Cabe hacer presente que los hechos antes descritos no fueron controvertidos por la demandada limitándose ésta a alegar que ya habría ya se habría indemnizado a los familiares del Sr. Lagos Marín por el daño causado y que en cualquier caso la acción incoada estaría prescrita y que además las conclusiones contenidas en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación constituyen hechos públicos y notorios, los que por lo demás guardan relación y concordancia con la restante prueba ya señalada. Lo anterior, nos lleva a concluir de forma inconcusa que la parte demandante fue víctima de violación de derechos humanos, por lo que tendremos por concurrente el elemento del hecho dañoso.

SÉPTIMO: Con el mérito del certificado de matrimonio y de los certificados de nacimiento, documentos individualizados con los números 5), 6) y 7) precedentemente, documentos no objetados y que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 342 del Código de Procedimiento Civil y 1.699, 1.700 y 1.706 del Código Civil hacen plena prueba, ha quedado acreditada la calidad de cónyuge de la demandante y la calidad de hijos de los actores respecto de la víctima, don Sergio Humberto Lagos Marín.

OCTAVO: La responsabilidad civil del Estado por la intervención de sus agentes en los hechos antes descritos fluye en particular de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6° de la Constitución Política de la República, en cuanto los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República obligación que mediante la realización de los hechos antes transcritos fue abierta y deliberadamente vulnerada.

Conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 6 de la Carta Fundamental dicha infracción generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley; responsabilidad que se construye a partir de lo



dispuesto en el artículo 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala que *“El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”*, responsabilidad que, en todo caso, no ha sido impugnada por la demandada, y que se refleja, además, en las reparaciones simbólicas otorgadas por la Ley N°19.123 y demás leyes indemnizatorias que el mismo demandado reconoce en su escrito de contestación.

NOVENO: Que, asentada la responsabilidad del Estado en cuanto agente que causó violaciones a los derechos humanos al familiar de los actores, corresponderá hacerse cargo de las defensas esgrimidas por la demandada, las cuales no tienen por mérito tergiversar o enervar tal responsabilidad, sino que dicen relación con la reparación ya entregada por el Estado a los actores, o en cuanto a la oportunidad en que se solicita el resarcimiento.

DÉCIMO: En cuanto a la defensa de reparación integral e improcedencia de las indemnizaciones por haber sido ya indemnizados los actores es necesario señalar que no obstante resulta efectivo que el Estado de Chile ha efectuado distintos esfuerzos por resarcir los perjuicios causados a raíz de los hechos acontecidos entre los años 1973 y 1990 en nuestro país, ello no puede entenderse incompatible con aquellas pretensiones indemnizatorias que por vía jurisdiccional pretendan las víctimas.

En primer lugar, el propio artículo 4° de la ley 19.923 dispone que *“en caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiere caber a personas individuales”*, lo que deja de manifiesto el pleno resguardo a la garantía constitucional de acudir a los tribunales de justicia cuando se estime que existe un daño que no ha sido reparado íntegramente.

En segundo lugar, dicha normativa tampoco estableció una



incompatibilidad entre los beneficios que otorga e indemnizaciones de perjuicios que pudieren llegar a otorgarse en sede judicial, no existiendo motivo alguno para presumir que dicho estatuto se dictó con el ánimo de indemnizar todo daño moral sufrido por las víctimas de derechos humanos.

En tercer lugar, no resulta razonable que los esfuerzos voluntariamente asumidos por el Estado y fijados en la ley singularizada, en modo alguno importen una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral.

En cuarto lugar, debe considerarse que las leyes antes indicadas tienen un carácter general puesto que abarcan a varias personas en distintas situaciones sin considerar la situación específica y particular de cada uno de sus beneficiarios, por lo que en ningún caso puede ser entendida como una indemnización justa en los términos del artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

En consecuencia, se desestimará la alegación de la demandada de suficiencia de pago.

DÉCIMOPRIMERO: Que, en cuanto a la excepción de prescripción extintiva, esta es fundada en haber transcurrido con creces el plazo de 4 años para el transcurso del plazo de prescripción de la acción por responsabilidad extracontractual -o de 5 años, en subsidio-, contado desde la fecha en que ocurrieron los hechos ilícitos hasta la fecha de notificación de la demanda, suspendido incluso el cómputo durante el régimen militar. La demandada expresa que, sin perjuicio de las normas de derecho interno invocadas, además, no existe en el derecho internacional de los derechos humanos instrumentos internacionales que declaren la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de crímenes de lesa humanidad ni que impidan o prohíban la aplicación del derecho nacional.

Sobre el particular, debe tenerse en consideración lo dispuesto por artículo 5° de la Constitución Política de la República, que prescribe que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, y que es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por



Chile y que se encuentren vigentes. Dicho precepto, permite la incorporación al derecho nacional de las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales que recogen principios generales del derecho humanitario, entre las cuales se cuenta la obligación de indemnizar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos, la que adquiere rango constitucional. En tal escenario, tenemos que la naturaleza de acción pretendida excede con creces el marco de la regulación interna sobre prescripción extintiva de las acciones civiles, el cual representa un estatuto jurídico insuficiente para la entidad del ilícito en cuestión, cual es, la comisión de crímenes de lesa humanidad y la consecuente necesidad de reparación del daño causado a raíz de estos, por lo que será necesario recurrir a normas que emanan del derecho internacional de derechos humanos y del *ius cogens* o reglas imperativas de derecho internacional.

En consecuencia, la aplicación de las normas de responsabilidad civil extracontractual contenidas en nuestro derecho interno pugnarían con la obligación de resarcir íntegramente los daños causados por crímenes de lesa humanidad, que ciertamente incluye el ámbito patrimonial, obligación que se contiene en normas de derecho internacional de derechos humanos incorporadas a nuestra Constitución Política de la República por mandato de su artículo 5°. En atención a lo dicho, las reglas de derecho internacional deben tener una aplicación preferente, según mandato del citado artículo, por sobre las disposiciones de derecho interno que permitan eludir responsabilidades al Estado y no reparar íntegramente el daño causado.

Esto se aviene con lo establecido en la Convención de Viena, sobre derecho de los Tratados, vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, que en su artículo 27 dispone que los Estados no pueden invocar su derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, y que de hacerlo, cometen un ilícito que compromete su responsabilidad internacional. Se concluye así, que la fuente de la responsabilidad civil del Estado con ocasión de violaciones de los derechos humanos se encuentra en principios y normas de derecho internacional de derechos humanos.

Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica”, ratificada por Chile y vigente, dispone en su



artículo 63.1 que “*cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados; dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada*”, lo que se traduce en una obligación constitucional para el Estado chileno, de indemnizar por la comisión de crímenes de lesa humanidad, incorporada a nuestro derecho interno por mandato del artículo 5° de la carta política, sin que sea posible estimar que dicha instrucción indemnizatoria está dirigida exclusivamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no a nuestros tribunales de justicia, lo que importaría transgredir preceptos constitucionales.

En suma y, a juicio de esta sentenciadora, la acción civil de perjuicios por la comisión de crímenes de lesa humanidad es imprescriptible, por los antecedentes normativos citados, por lo que se rechazará la excepción de prescripción extintiva deducida.

DÉCIMOSEGUNDO: Que, habiéndose desechado las excepciones opuestas y estableciéndose la responsabilidad civil estatal, y esbozándose la idea sobre la compatibilidad entre la indemnización de perjuicios por daño moral y las prestaciones que otorga la Ley N° 19.123 entre otras, y declarada la imprescriptibilidad de la acción de perjuicios por la comisión de crímenes de lesa humanidad, en el considerando previo, debe analizarse el fondo de la acción deducida, esto es, la procedencia de indemnizar a los demandantes por el daño moral producido con ocasión de los apremios ilegítimos y violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado en contra de su padre y cónyuge, respectivamente, y en la afirmativa, fijar la cuantía de la indemnización, refiriéndose de paso a las alegaciones relativas al monto y naturaleza de la indemnización e improcedencia del pago de reajustes en la forma solicitada por los actores, opuestas por la demandada.

En reiterada jurisprudencia, la Corte Suprema ha definido el daño moral como la lesión efectuada culpable o dolosamente, que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o



en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a otra.

Que en relación al daño moral, los actores provocaron la testimonial de doña Fresia Mónica Quilodrán Ramos, don Lautaro Robín Videla Moya y doña Alejandra Luz Repetto Seeger, las que constan a folio 43 y 44, quienes debidamente juramentos y sin tachas han expresado en forma conteste, que han podido constatar el sufrimiento de los demandantes respecto a la desaparición quien ejercía el rol de padre y cónyuge en dicha familia y de no haber encontrado hasta la fecha sus restos mortales.

Asimismo, como ya se indicare en considerados previos, el propio Fisco en sus escritos de discusión y a través de su prueba, ha dado cuenta que los actores son beneficiarios de las leyes indemnizatorias, beneficios que se otorgan a personas afectadas por violaciones a derechos humanos, reconociendo de esta forma una necesidad de reparación y con ello consecuentemente también un daño.

Este tribunal entiende que el perjuicio sufrido por los actores corresponde al daño moral de los familiares directos de Sergio Lagos Marín que desapareció en circunstancias que fueron calificadas como un crimen de carácter de lesa humanidad y violación a sus derechos humanos.

En mérito de lo ya expuesto y teniendo presente los antecedentes probatorios más arriba descritos, consistentes en los certificados, copia de informes y sentencias, documentos oficiales y declaraciones testimoniales, que son de la entidad y gravedad suficiente para dejar por establecido que los demandantes de autos, han sufrido dolor y aflicción permanente a consecuencia de la desaparición de don Sergio Lagos Marín, su calidad de cónyuge y padre desaparecido, respecto del cual como bien se estableció anteriormente, ha quedado acreditado el parentesco y la relación correspondiente que los ligaba con aquel. A mayor abundamiento, se hace presente que el daño se ha prolongado desde el 07 de febrero de 1975, día en que fue detenido y subido a un vehículo por agentes del estado, sin tener antecedente hasta la fecha de su cuerpo, daño que repercutirá hasta el resto de sus vidas, motivo por el cual queda suficientemente acreditado el daño moral que se demanda.



DÉCIMOTERCERO: Determinada la existencia del daño moral sufrido por las demandantes y habiendo descartado las excepciones alegadas por la demandada, es necesario fijar su cuantía en dinero. Para esta materia, el tribunal considerará prudencialmente el mérito de los antecedentes aportados al proceso, en especial la magnitud del daño y las horribles circunstancias de los ilícitos, a fin de fijar un monto que se corresponda a la entidad y naturaleza del daño ocasionado a las víctimas.

Este tribunal comprende plenamente que la suma de dinero que se conceda a los demandantes en nada amaga el dolor y aflicción sufridos, debido a las conductas ilícitas ya narradas cometidas por agentes del Estado el mes de febrero de 1975, momento en que desnaturalizándose y trastornándose los fines del Estado, aquellos que por disposición moral y legal estaban encargados de la cautela y seguridad de los ciudadanos, atentaron en los términos más crueles en contra de éstos, encontrándose entre ellos don Sergio Lagos Marín.

Que, en consecuencia y según lo expuesto, se fijarán las siguientes indemnizaciones de perjuicios, por daño moral, que deberá pagar el Estado a los demandantes:

1.- Marta Angélica Concha Contreras, en su calidad de cónyuge, la suma de \$25.000.000.- (veinticinco millones de pesos).-

2.- Sergio Ernesto Lagos Concha, en calidad de hijo, la suma de \$20.000.000.- (veinte millones de pesos).-

3.- Esteban Humberto Lagos Concha, en su calidad de hijo, la suma de \$20.000.000.- (veinte millones de pesos).-

Al respecto, cabe tener presente numerosa jurisprudencia reciente de tribunales superiores de justicia que, sin ser vinculante para este tribunal, en circunstancias análogas, han fijado indemnizaciones de montos similares.

DÉCIMOCUARTO: Las sumas referidas en el considerando precedente se pagarán reajustadas de acuerdo a la variación del IPC desde la fecha en que quede firme la condena y el pago efectivo de la indemnización.

Que, junto a lo anterior, tales sumas deberán pagarse aumentadas con los intereses corrientes aplicados desde la fecha en que quede firme la



condena y el pago efectivo de la indemnización, todo conforme liquidación que se practicará en secretaría de este Tribunal.

DECIMOQUINTO: Que en cuanto a las costas de las causa cada parte soportará las propias, en razón de no haber resultado totalmente vencida la demandada.

Y, lo dispuesto,- además-, en los artículos 5 y siguientes y 38 de la Constitución Política de la República; 4 de la Ley N°19.653, de Bases Generales de la Administración del Estado; 27 y siguientes de la Convención de Viena; 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 139, 144, 160, 170, 342, 346, 358, 384, 426 y 428 del Código de Procedimiento Civil, SE DECLARA:

I.- Que **SE ACOGE PARCIALMENTE** la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral deducida por doña Marta Angélica Concha Contreras, don Sergio Ernesto Lagos Concha y don Estaban Humberto Lagos Concha, en contra del Fisco de Chile, todos ya individualizados, y se condena a éste a pagar en favor de tales demandantes las siguientes sumas:

a).- Marta Angélica Concha Contreras, en su calidad de cónyuge, la suma de \$25.000.000.- (veinticinco millones de pesos).-

b).- Sergio Ernesto Lagos Concha, en calidad de hijo, la suma de \$20.000.000.- (veinte millones de pesos).-

c).- Esteban Humberto Lagos Concha, en su calidad de hijo, la suma de \$20.000.000.- (veinte millones de pesos).-

II.- Que, las sumas indicadas precedentemente se pagarán reajustadas de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor, y aumentadas con los intereses corrientes, calculados desde la fecha en que quede firme esta sentencia y el pago efectivo de la indemnización, todo según liquidación que se practicará en Secretaría de este Tribunal;

III.- Que, no se condena en costas al demandado, por no haber sido totalmente vencido.

Regístrese, Dese copia autorizada y certificado de ejecutoria a petición verbal de la parte interesada.



PRONUNCIADA POR DOÑA NICOLE KEMP GOMILA, JUEZ
SUBROGANTE.

